**Palabras de Elena L. Brineman, Directora de la USAID/República Dominicana
FINJUS-USAID Serie Anti-Corrupción
Encuentro con el Presidente de la República, Ing. Hipólito Mejía
Hotel Jaragua, Salón Anacaona**

14 de abril del 2004

- Honorable Ingeniero Hipólito Mejía, Presidente Constitucional de la República Dominicana y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano
- Integrantes de la mesa de honor
- Amigos, todos.

Una vez más, es un honor para mí estar con ustedes. Quisiera agradecer a la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) por invitarme a dar los comentarios de apertura en la última de esta serie de importantes reuniones, donde los candidatos presidenciales del 2004 han sido invitados a discutir sus plataformas de lucha contra la corrupción. La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana se siente orgullosa de trabajar con FINJUS, a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en el patrocinio de este evento, pues creemos que la buena gobernabilidad es vital para una democracia y una economía fuerte.

En esta ocasión nos honramos en darle la bienvenida al Presidente Constitucional de la República Dominicana, Ingeniero Hipólito Mejía, candidato presidencial por el Partido Revolucionario Dominicano. El Presidente Mejía es el último de los candidatos presidenciales en presentar su visión de cómo, si resulta electo, su administración combatirá la corrupción en la República Dominicana.

En la primera reunión de esta serie discutí el vínculo entre corrupción y democracia, y en la segunda, entre corrupción y economía. Hoy daré unos breves comentarios sobre la aplastante carga que representa la corrupción para los pobres de la sociedad.

La corrupción afecta las condiciones de vida, aumenta la desigualdad en la redistribución de los ingresos en la población, y agudiza la situación de los pobres. En una encuesta Rumbo-Gallup publicada en enero del 2000, los dominicanos creían que la corrupción era una causa importante de la pobreza. En el 2002, aun antes de que el público conociera la extensión del fraude en el sector bancario y mucho antes de la crisis financiera resultante, Transparencia Internacional realizó una encuesta sobre la corrupción en la República Dominicana y otros 44 países. La encuesta medía las actitudes, las expectativas y las prioridades de la ciudadanía en cuanto a la corrupción. En la República Dominicana, casi el 90% respondió que la corrupción afectaba significativamente su vida personal y familiar, el ambiente de negocios, la vida política, y la cultura y valores de la sociedad dominicana. Más aún, una mayoría abrumadora creía en ese momento que la corrupción aumentaría o se quedaría igual durante los siguientes tres años. Casi el doble de los encuestados pobres, en relación a los encuestados ricos, decía que la corrupción afectaba muy significativamente su vida personal y familiar, un resultado de la encuesta que sugiere con firmeza que la corrupción hace más daño a los pobres que a los ricos. Los

resultados de estas encuestas también dejan claro que el azote de la corrupción trasciende a las administraciones.

La corrupción golpea a los pobres tanto directa como indirectamente. La historia reciente nos da un ejemplo dramático. La crisis financiera ligada al fracaso de Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil causó la caída estrepitosa del peso dominicano. Todos los dominicanos se han visto afectados, pero aquellos que ganan un sueldo mínimo lo han sentido más. Entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre del 2003, el promedio del salario mensual mínimo cayó en un 30%, ajustando las cifras para la inflación. Esto quiere decir que es cada vez más difícil para los pobres pagar los bienes y servicios básicos.

Debido a los efectos económicos y presupuestales de la crisis, hay también menos fondos públicos disponibles para invertir en programas que podrían ayudar a los pobres, tales como salud pública, educación pública, agua y saneamiento, defensa judicial pública y los desayunos escolares. La corrupción afecta directamente tanto el acceso de los pobres a los servicios públicos como la calidad de los servicios ofrecidos.

Cada vez que alguien acepta una comisión de 10, 15, ó 20% en un contrato para medicinas que se suministran a través de las clínicas públicas, esto eleva los precios y perjudica directamente a los pobres. Cuando los maestros asignados a las escuelas rurales no llegan a clase los lunes y se van temprano los viernes, este es un comportamiento corrupto: los niños no aprenden y la pobreza se extiende. Cada vez que se otorga un contrato para construir un sistema rural de agua y el sistema no se termina, los pobres se empobrecen más. Los pobres sufren cuando los doctores que reciben salarios del sector público para una tanda completa ofrecen servicios solamente unas cuantas horas al mes. Un estudio reciente del Consejo de Población demostró que, en un hospital público dominicano, los doctores que deberían trabajar cuatro horas al día estaban trabajando sólo dos horas; aquellos que deberían trabajar diariamente sólo lo hacían dos días a la semana.

Cada vez que un narco-traficante soborna a un juez para que no conozca su caso, ese traficante sigue en libertad de explotar a los jóvenes e involucrarlos en el tráfico de drogas, robándoles cualquier oportunidad de escapar de la pobreza. Cuando los hogares se roban el 30% de la electricidad que se produce, los costos de la electricidad deben aumentar para compensar la diferencia, lo que contribuye a los problemas financieros y, por tanto, a prolongados apagones. Son los colmados y los salones de belleza de los barrios que luchan por sobrevivir; y es el poder adquisitivo de los pobres que se reduce. Cuando esos negocios quiebran, los pobres pierden su modo de vida. Este tipo de corrupción generalizada ha persistido en la República Dominicana administración tras administración.

La lucha contra la corrupción y la reducción de su impacto sobre los pobres son grandes retos. Sigue siendo imperativo el enfoque en asegurar las transacciones gubernamentales transparentes y responsables, el apego al estado de derecho, los funcionarios públicos responsables y comprometidos, y la competencia económica justa sin prerrogativas.

Este esfuerzo requiere un sistema de justicia fuerte, independiente y competente, agencias regulatorias gubernamentales también fuertes e independientes, y la vigilancia de la sociedad civil para garantizar la buena gobernabilidad. ¡Uno de los medios más efectivos para reducir la pobreza es reduciendo la corrupción!

Ciertas reformas legales e institucionales recientes son primeros pasos prometedores. El Congreso y el Ejecutivo han dado pasos durante los últimos dos años para que el presupuesto público sea más transparente y orientado a resultados, para reducir el tamaño y el alcance de la infame Cuenta 1401, y para implementar un sistema integrado de administración de las finanzas públicas. Los esfuerzos de la Secretaría de Educación para establecer sistemas de información y de cuentas precisos y transparentes, y hacerlos accesibles al público a través del internet es un adelanto que puede reproducirse. Esperamos escuchar cómo el Presidente, y candidato a presidente, Mejía continuará estos primeros pasos y cómo se propone servir de ejemplo en la lucha contra la corrupción.

En parte debido a la corrupción, el próximo presidente enfrentará el reto de estabilizar las finanzas del país, pero, más aún, enfrentará el reto de restablecer la confianza de la población en las posibilidades del futuro. Esperamos continuar nuestro trabajo de apoyo en la lucha por garantizar unas instituciones públicas honestas, competentes y orientadas a la ciudadanía en la República Dominicana.

Muchas gracias.